

Editorial

En 1994 se ejecutó el tercer censo nacional agropecuario (CENAGRO III), cuyos resultados han ido publicándose a lo largo de 1996. Una de las razones de su importancia es que se trata del primer censo realizado desde 1972, año en el que estaba en plena ejecución la reforma agraria iniciada en 1969. Después de la reforma agraria continuó modificándose la estructura de tenencia de la tierra, no tanto por transferencias sino por división y subdivisión de las empresas asociativas creadas por la reforma agraria —cooperativas y sociedades agrícolas de interés social—. Hasta la realización del censo último no había información suficiente, por lo tanto, de las actuales características del agro peruano.

Uno de los objetivos hecho explícito por el actual gobierno es el de promover la modernización de la actividad agropecuaria. Objetivo sin duda de gran importancia, pues el nivel de atraso de una parte significativa del sector agrario no necesita ser demostrado. Sus efectos son los bajos niveles de productividad, los altos costos de producción, la calidad deficiente del producto, el alto porcentaje de mermas, la casi total inexistencia de técnicas de poscosecha, los bajos niveles de ingreso de los productores y la difusión de la pobreza en el campo.

¿Cuál es la dimensión del problema? ¿Cuán grande es el reto? ¿Hasta qué punto las medidas adoptadas por el gobierno son adecuadas para conducir al sector agrario hacia su modernización?

Existe un primer problema de magnitudes: el CENAGRO III registra la existencia de 1 742 267 productores. De ellos, sólo el 15,7% tiene más de 10 hectáreas. El resto está conformado por pequeños agricultores y por minifundistas. Si por minifundista consideramos a los productores que poseen menos de 3 hectáreas —criterio no exento de arbitrariedad—, representan entonces el 55% del total. En promedio, cada minifundista tendría apenas algo más de 1,1 Ha. Obviamente, los minifundistas deben obtener ingresos complementarios dentro o fuera de la actividad agropecuaria para poder subsistir. Su suerte, por lo tanto, no depende sólo —y con frecuencia ni siquiera principalmente— del agro, sino de la capacidad de

la economía de generar empleo. Los minifundistas, por lo tanto, no son necesariamente beneficiarios directos de una política sectorial agraria modernizadora.

Si se considera como "pequeño productor" a aquéllos que poseen de 3 a 10 hectáreas, contaremos con algo más de medio millón. Una parte importante de estos productores y de sus familias podrían salir adelante en un proceso de modernización en la medida en que tienen la cantidad de tierra mínima suficiente para no sólo sobrevivir sino para generar excedentes comercializables. Pero ello será posible si se crean ciertas condiciones favorables, como es el acceso a créditos, asistencia técnica, mejoramiento de los canales de comercialización, etcétera. A este grupo de pequeños productores —con un área promedio de 5,1 hectáreas cada uno— se sumarían otros 200 mil que poseen extensiones que varían entre 10 y 50 hectáreas, con un promedio de 19,2 hectáreas cada uno. En síntesis, la modernización del agro debería alcanzar a un universo de 700 mil productores (además de la gran agricultura, la cual tiene un mejor acceso a los servicios, financiamiento, tecnologías e información).

Este ejercicio no es sino una primera aproximación, y un análisis detenido de la información censal daría obviamente resultados más precisos. Pero es suficiente para mostrar que no hay una proporción entre la magnitud del desafío y los esfuerzos públicos y privados comprometidos hasta el momento para afrontarlo.

Modernización implica también una mayor capacitación de los productores. La familiarización con las tecnologías y las formas de gestión modernas requieren cada vez mayores niveles educativos. El CENAGRO III ofrece al respecto información por demás preocupante: el 22% de los productores son analfabetos, y el 60% apenas llegan a la educación primaria. No es una situación que afecte sólo a minifundistas: aun entre los productores que tienen entre 10 y 20 hectáreas, el 54% no tuvo educación alguna o tuvo primaria incompleta.

Los esfuerzos del gobierno respecto del sector agrario desde 1990 se han centrado sobre todo en la liquidación de las empresas públicas (de financiamiento y de comercialización), en la liberalización de los mercados y en dar seguridad jurídica a los inversionistas. La información que nos ofrece el CENAGRO III permite afirmar que los esfuerzos necesarios para modernizar la agricultura, y no tan sólo algunos predios, son de tal magnitud que implican una decisión política y una movilización de recursos de otra escala a la adoptada hasta el momento.